

# CUADERNOS DE TRABAJO

Instituto de la Judicatura Federal - Escuela Judicial

## La violencia contra las mujeres: Responsabilidad del Estado

MARÍA DE LA CONCEPCIÓN VALLARTA VÁZQUEZ

---

SERIE MORADA  
Igualdad de género  
1/2014



INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL  
ESCUELA JUDICIAL

Igualdad de género

# CUADERNOS DE TRABAJO

Es una línea de publicaciones del Instituto de la Judicatura Federal que ofrece a la comunidad judicial y académica materiales para la reflexión y discusión sobre la justicia, así como herramientas de trabajo para los juzgadores, sus colaboradores y auxiliares, en diez grandes series:

**Serie Roja.** Estudios sobre la carrera judicial

**Serie Amarilla.** Notas pedagógicas

**Serie Verde.** Metodología del trabajo judicial

**Serie Azul.** Redacción judicial

**Serie Naranja.** Ética judicial

**Serie Olivo.** Información legislativa

**Serie Marrón.** Información general

**Serie Gris.** Sistema penal acusatorio

**Serie Blanca.** Grupos vulnerables

**Serie Morada.** Igualdad de género

Es las que se recogerán monografías, ensayos, cuadros estadísticos, antologías, materiales didácticos, procesos de creación o de reforma de leyes, compilación de acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o del Consejo de la Judicatura Federal, textos legales y jurisprudenciales.

Los **Cuadernos de trabajo** son de distribución gratuita. Los trabajos firmados son responsabilidad exclusiva de sus autores(as), por lo que no reflejan, necesariamente, el punto de vista institucional. Se autoriza la reproducción total o parcial citando la fuente.

Instituto de la Judicatura Federal – Escuela Judicial. Sidar y Rovirosa No. 236, colonia Del Parque, delegación Venustiano Carranza, C.P. 15960, México, D.F., Tel. 51 33 89 00, Ext. 6669.

Coordinadores: Magdo. Julio César Vázquez-Mellado García, Director General; David Cienfuegos Salgado, Secretario Técnico de Investigación.

Cualquier crítica o comentario sobre el contenido de los **Cuadernos** serán bienvenidos a la cuenta de correo electrónico: [investigacionijf@correo.cjf.gob.mx](mailto:investigacionijf@correo.cjf.gob.mx), o al teléfono (01) 51 33 89 00 extensión 6669, y serán hechos llegar a las y/o los autores.

# *La Violencia contra las Mujeres: Responsabilidad del Estado*

## **Introducción**

La violencia contra las mujeres, siempre ha existido. Resulta fácil encontrar testimonios antiquísimos donde se refiere a este fenómeno como algo natural, parte de la vida cotidiana, e incluso se habla del deber del hombre de castigar a su mujer si ella “desobedece” o de alguna forma falla en su deber de sumisión. En efecto, en sus diversas manifestaciones, la violencia es una forma de ejercer el poder. Implica un desequilibrio real o simbólico entre quien la ejerce y quien la recibe.

*“De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la violencia de género es todo acto que resulta en daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, incluyendo las amenazas de tales actos, la coerción o las privaciones arbitrarias de la libertad, que ocurren tanto en la vida pública como en la privada.”<sup>1</sup>*

¿En qué momento este fenómeno “natural”, que siempre ha existido, se vuelve responsabilidad del Estado? ¿Hasta dónde es responsable el Estado de lo que ocurre en el ámbito privado? ¿El Estado también ejerce violencia contra las mujeres? En este ensayo se invita al lector y a la lectora a reflexionar sobre estos temas, a hacer visible lo invisible, a reconocer, a denunciar y a erradicar la violencia contra las mujeres, en todas sus formas y en todos los ámbitos donde se manifiesta.

MTRA. MARIA DE LA CONCEPCIÓN VALLARTA VÁZQUEZ

*Directora de Equidad de Género  
Consejo de la Judicatura Federal*



---

<sup>1</sup> Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas. Oficina Regional para México y Centroamérica, “Con ganas de vivir... una vida sin violencia es un derecho nuestro”, ciudad de México, 1998, p. 3.



# *La Violencia contra las Mujeres: Responsabilidad del Estado*

María de la Concepción VALLARTA VÁZQUEZ

## **I. 25 de noviembre**

El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, declaró el 25 de noviembre el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, siguiendo la propuesta de la República Dominicana, y con el apoyo de 60 países.

El 25 de noviembre de 1960 los cuerpos de las tres hermanas Mirabal se encontraron en el fondo de un acantilado. Patria, Minerva y Maria Teresa habían sido asesinadas a garrotazos. Estas mujeres dedicaron gran parte de su corta vida a luchar por la libertad política de su país, oponiéndose firmemente a una de las tiranías más opresoras y duras que tenía Latinoamérica: la de Rafael Leónidas Trujillo.

A causa de su persistente actividad rebelde, las “mariposas” como se les llamaba a las hermanas Mirabal, fueron encarceladas y torturadas en no pocas ocasiones, a pesar de lo cual decidieron continuar luchando con el único objetivo de acabar con la dictadura de Trujillo.

El horrendo crimen, que en la prensa se manejó como “un accidente”, contribuyó a despertar la conciencia entre la

población y culminó, seis meses después, con el asesinato del caudillo.<sup>2</sup>

## **II. La violencia contra las mujeres en cifras**

- En 2011, 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más declararon haber padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra u otras personas.
- Las mujeres más expuestas a la violencia de cualquier agresor son las de 30 a 39 años; 68% de ellas han enfrentado al menos un episodio de violencia o abuso. Chihuahua alcanza 80% y el estado de México 78 por ciento.
- 47 de cada 100 mujeres de 15 años y más que han tenido al menos una relación de pareja, matrimonio o noviazgo, han sido agredidas por su actual o última pareja a lo largo de su relación.
- La violencia de pareja está más extendida entre las mujeres que se casaron o unieron antes de los 18 años (52.9%) que entre quienes lo hicieron entre los 25 y más años de edad (43.4 por ciento).

---

<sup>2</sup> Israel Viana, Madrid, ABC.es, 23 de diciembre 2009.

- Entre las mujeres que se han unido o casado dos o más veces, el nivel de violencia es mayor (54.6%) que entre aquellas que solo han tenido una unión o matrimonio (48.7%).
- 32% de las mujeres ha padecido violencia sexual por parte de agresores distintos a la pareja, la cual incluye actos de intimidación, acoso y abuso sexual.
- 27% del total de homicidios de mujeres que se registraron entre 2008 y 2013 en el país, ocurrieron en Chihuahua y en el estado de México.
- Durante 2013 ocurrieron 1,083 suicidios de mujeres y más de la mitad (54.8%) fueron de jóvenes de entre 10 y 29 años de edad.<sup>3</sup>

Los resultados de la más reciente Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) levantada por el INEGI a finales de 2011, permiten determinar la prevalencia de la violencia por cada 100 mujeres de 15 años y más. A partir de esta información es posible afirmar que la violencia contra las mujeres es un problema de gran dimensión y una práctica social ampliamente extendida en todo el país.

*“Negar la dignidad de alguien es humillarlo. Tenemos que estar muy conscientes de este, más de lo que ya estamos. Ser humillado arriesga la seguridad. Es un riesgo innecesario; no logra nada positivo. Si se despoja a la gente del sentido de la decencia-ya sea física o*

*psicológicamente, por omisión o intencionalmente- o si carece o se le niega el reconocimiento básico como individuo o como pueblo o se le niega su derecho más fundamental de vivir a salvo, el resultado es la pérdida de confianza, el letargo, la desesperación, la radicalización.”*<sup>4</sup> Sergio Vieyra de Mello, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

### III. Reconocimiento de los Derechos Humanos de las Mujeres

A pesar de lo grave y extendido del fenómeno de la violencia contra las mujeres, hasta hace apenas 20 años, no se reconocía como un problema de salud pública ni mucho menos como responsabilidad del Estado. En 1993, en el marco de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena, se reconoció que “la violencia contra las mujeres viola los derechos humanos”. Se adoptó por parte de las Naciones Unidas, una Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la asignación de una Relatora Especial sobre la Violencia contra las Mujeres. Las mujeres en esta Conferencia Mundial, desafiaron la dicotomía entre lo público y lo privado y expusieron la violencia contra las mujeres como una violación a los derechos humanos, sea ésta perpetrada por un pariente masculino en el hogar o por un soldado en una zona de guerra.

La documentación sobre la violación a los derechos humanos de las mujeres que se

<sup>3</sup> Fuente: INEGI, <http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2014/violencia0.pdf>

<sup>4</sup> Norberto Moreno, “Feminicidio Impunidad”, 2005.

recogió a nivel mundial, demostró que la persistencia de la violencia contra las mujeres en las sociedades de todo el mundo es inseparable de su falta de poder y de su status socioeconómico.

Las mujeres postularon que las violaciones y la discriminación contra las mujeres era una realidad devastadora que estaba exigiendo remedios tan urgentemente como otras violaciones a los derechos humanos.<sup>5</sup>

*“La violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de derechos humanos... en tanto continúe, no podemos decir que estamos haciendo verdadero progreso hacia la igualdad, el desarrollo y la paz.”* Koffi Annan, 1999.

#### IV. Belem dó Pará

En 1994, la Organización de los Estados Americanos, suscribió la “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”, conocida como Belem dó Pará por la ciudad de Brasil donde fue promulgada. México ratificó esta Convención en 1998.

Este es el primer y hasta la fecha, único instrumento a nivel mundial en la materia. Establece que la violencia contra la mujer constituye una violación a sus derechos humanos y libertades fundamentales; y que es manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.

---

<sup>5</sup> Charlotte Bunch, Claudia Hinojosa, Niamh Reilly, “Los Derechos de las Mujeres son Derechos Humanos, Crónica de una movilización mundial”, Edamex, México, 2000.

Esta Convención, amplía la protección del Estado al ámbito privado, definiendo en su artículo primero la violencia contra la mujer como “...*Cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.*”

Se aplica en los ámbitos de: familia o unidad doméstica (entre otras manifestaciones, violación, maltrato, abuso sexual); comunidad (entre otras, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro, acoso sexual en centro de trabajo o educativo o establecimiento salud); perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes (art. 2).

Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia. (art. 7).

Los Estados Partes se comprometen en adoptar, en forma progresiva, medidas para modificar patrones socioculturales a través de la educación y concientización sobre los problemas relacionados con la violencia contra la mujer (art. 8).

Los Estados partes se comprometen a ofrecer a la mujer objeto de violencia rehabilitación y capacitación. De esta manera se reconoce que quien ha sufrido violencia de forma sistemática y prolongada, requiere no sólo de atención médica y psicológica, sino de rehabilitación ya que esta forma de violencia es una forma de tortura. Por otra parte, se reconoce la responsabilidad del Estado de ofrecer capacitación para que la

víctima de violencia pueda trabajar y tener autonomía.

Por último, los estados partes, se comprometen también a garantizar la investigación y recopilación de estadísticas para evaluar la eficacia de las medidas adoptadas para prevenir y erradicar la violencia.

## **V. Sentencias Internacionales**

1) *Derecho a no sufrir violencia ni torturas en las cárceles en razón del género. Caso Penal Miguel Castro Castro vs. Perú. Corte Interamericana de Derechos Humanos.*

Los hechos expuestos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la demanda interpuesta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, habrían ocurrido a partir del 6 de mayo de 1992 y se refieren a la ejecución del “Operativo Mudanza 1” dentro del Penal Miguel Castro Castro, durante el cual el Estado, supuestamente, produjo la muerte de al menos 42 internos, hirió 175 internos, y sometió a trato cruel, inhumano y degradante a otros 322 internos.

En su sentencia, la Corte Interamericana estimó que el Estado reconoció que como consecuencia de los hechos del 6 al 9 de mayo de 1992 hubo personas que murieron, personas que resultaron heridas y personas que sufrieron, incluyendo a los familiares de los internos.

Asimismo, dicho reconocimiento puede tener gran relevancia en el ámbito interno, pues los hechos que el Estado reconoce, más de catorce años después de ocurridos, se caracterizan por ser sumamente graves

y tratarse de acciones realizadas de forma directa por agentes del Estado, que implican, por consiguiente, graves violaciones a derechos humanos protegidos en la Convención Americana. Durante muchos años esos hechos fueron negados o calificados de diversas formas tanto por distintas autoridades estatales como por algunos sectores de la sociedad civil y los medios de comunicación, y en múltiples ocasiones fueron enmarcados como legítimos dentro de la “lucha contra el terrorismo”.

Es preciso resaltar que en el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CRV) que se creó ex profeso en Perú, se analizó que dentro de ese contexto de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto interno, las mujeres se vieron afectadas por la violencia de manera diferente a los hombres. La CVR incluyó en su informe un capítulo específico sobre la violencia sexual contra las mujeres y también se refirió a la situación que experimentaron las madres reclusas en centros penitenciarios. Asimismo, en dicho informe se concluyó que durante el conflicto interno y con motivo de éste los agentes estatales fueron responsables de aproximadamente un 83% de los casos de violación sexual contra las mujeres.

*“...la Corte sostuvo por primera vez que la violencia de género es una forma de discriminación de acuerdo a los precedentes del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer...” La Corte de igual manera consideró que “...la violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen en una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo*



*humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno...”*

Esta sentencia contra el gobierno de Perú, es relevante porque reconoce que la violencia que se cometió contra las personas privadas de su libertad, fue responsabilidad del Estado. De manera particular, reconoce la violencia sexual que se ejerció por parte de los agentes del Estado contra las mujeres privadas de su libertad, al obligarlas a permanecer desnudas en ocasiones, durante semanas, sin ninguna privacidad ni higiene. No solamente la violación es una forma de violencia sexual sino también las miradas, los comentarios, las burlas, las ofensas que dañan la dignidad de las personas.

## *2) Caso Ángeles Gonzales Carreño contra España, Comité de la CEDAW*

Este caso, presentado ante el Comité CEDAW en 2012 relata la historia de Ángeles que sufre de violencia física y psicológica por parte de su marido. Después de tres años de convivencia, ella decide separarse después de que él la amenaza con un cuchillo delante de su hija Andrea, de tres años de edad. Ángeles presentó denuncia ante las autoridades que le otorgan a ella la custodia de su hija y derecho a visitas al padre de la niña (F.R.C.). Entre diciembre 1999 y noviembre 2001, FRC acosó, amenazó y agredió verbalmente a Ángeles en repetidas ocasiones, también maltratando psicológicamente a su hija Andrea. En ese tiempo, Ángeles presentó no menos de 30 denuncias.

La promovente solicitó órdenes de alejamiento de FRC en relación con ella y con su hija, régimen de visitas vigilado y

pago de pensión. A pesar de las múltiples denuncias, FRC sólo fue condenado una vez, por vejaciones.

Se emitieron órdenes de alejamiento en favor de Ángeles. Sólo una incluía a Andrea. FRC la recurrió y el juzgado la dejó sin efecto respecto a Andrea, por considerar que la orden entorpecía el régimen de visitas y podían perjudicar las relaciones entre padre e hija. Otras órdenes judiciales de alejamiento en favor de Ángeles eran violadas por FRC sin ninguna consecuencia legal para él.

Ángeles denunció que las visitas con su padre afectaban la salud mental de Andrea. En comparecencia, la niña manifestó que no le gustaba estar con su padre porque no la trataba bien.

A pesar de continuos incidentes violentos protagonizados por FRC durante un año y medio de visitas vigiladas, un juzgado autorizó visitas no vigiladas. Ángeles apeló sin éxito esta decisión.

Saliendo de una audiencia, FRC le dijo a Ángeles que le quitaría lo que más quería. Ese mismo día Andrea tuvo visita con su padre. Cuando Ángeles fue a recogerla en los servicios sociales, no llegaron FRC ni Andrea.

La policía encontró los cuerpos sin vida de ambos en el domicilio de FRC. El padre le disparó a la niña antes de suicidarse.

Ángeles interpuso varias demandas ante el Estado español exigiendo reparación por los daños sufridos por la acción negligente del Estado.

El Comité CEDAW resolvió a favor de Ángeles, recomendando, entre otras cosas, que se tomaran medidas adecuadas y efectivas para que los antecedentes de violencia doméstica se tomen en cuenta en el momento de estipular los derechos de custodia y visita relativos a los hijos, y para que el ejercicio de los derechos de visita o custodia no pongan en peligro la seguridad de las víctimas de la violencia, incluidos los hijos.

En este caso, la responsabilidad del Estado recae principalmente en quienes deben impartir justicia. Se reconoce la negligencia y la responsabilidad al no prevenir el desenlace trágico de esta violencia extrema en contra de Ángeles y Andrea.

*3) Derecho a procesos eficaces frente a la violencia doméstica. Caso Maria da Penha Maia Fernandes vs. Brasil Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del 16 de abril del 2013. Derecho a procesos eficaces frente a la violencia doméstica. Caso Maria da Penha Maia Fernandes contra Brasil. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 16 de abril del 2001.*

El 20 de agosto de 1998, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión”) recibió una denuncia presentada por la señora Maria da Penha Maia Fernandes.

La denuncia alega la tolerancia por parte de la República Federativa de Brasil (en adelante “Brasil” o “el Estado”) de la violencia perpetrada en su domicilio en la ciudad de Fortaleza, Estado de Ceará, por Marco Antônio Heredia Viveiros en perjuicio de su entonces esposa Maria da Penha Maia Fernandes durante años de su

convivencia matrimonial y que culminó en una tentativa de homicidio y nuevas agresiones en mayo y junio de 1983. Maria da Penha, como producto de esas agresiones padece de paraplejia irreversible y otras dolencias desde el año 1983. Se denuncia la tolerancia estatal por no haber tomado por más de quince años medidas efectivas necesarias para procesar y penar al agresor, pese a las denuncias efectuadas.

En cuanto al fondo de la cuestión denunciada, la Comisión concluye en este informe, redactado de acuerdo con el artículo 51 de la Convención, que el Estado violó en perjuicio de la señora Maria da Penha Maia Fernandes los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, garantizados por los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Concluye también que esta violación ocurre como parte de un patrón discriminatorio respecto a tolerancia de la violencia doméstica contra las mujeres en Brasil por ineficacia de la acción judicial. La Comisión recomendó al Estado que llevara a cabo una investigación seria, imparcial y exhaustiva para determinar la responsabilidad penal del autor del delito de tentativa de homicidio en perjuicio de la señora Fernandes y para determinar si hubo otros hechos o acciones de agentes estatales que hubieran impedido el procesamiento rápido y efectivo del responsable; recomendó también la reparación efectiva y pronta de la víctima, así como la adopción de medidas en el ámbito nacional para eliminar esta tolerancia estatal frente a la violencia doméstica contra mujeres.

Nuevamente en este caso, se da cuenta de qué manera la negligencia de quienes deben impartir justicia, tuvo

consecuencias graves en la salud de una mujer que no fue protegida adecuadamente por el Estado, a pesar de haber denunciado repetidamente la violencia a la cual estaba sujeta.

4) *Casación anula sentencia absolutoria de un hombre que había abusado sexualmente de su mujer. Caso Adorno Florentín.*

En esta sentencia la Cámara Federal de Casación Penal revoca una sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal N° 16 que había absuelto a Atilio Ramón Adorno Florentín, del delito de abuso sexual doblemente agravado por haber sido cometido mediante acceso carnal y por haber configurado un sometimiento gravemente ultrajante, cometido contra la esposa. En el caso en concreto se trataron de violaciones ocurridas dentro del matrimonio.

El voto del juez Slokar, al que adhiere la mayoría (con la disidencia de Ledesma) analiza las características de las violaciones ocurridas dentro del matrimonio y en un contexto de violencia de género y advierte que:

*"La dinámica descrita es conducida voluntariamente por el agresor y logra mantener a la víctima sometida, explotando alternativamente su miedo a sufrir nuevos o peores ataques o la esperanza de una reforma en la actitud del compañero. Empero, ello de ninguna manera significa que exista consentimiento respecto de los hechos que el propio tribunal calificó como abusos*

*sexuales. Resulta de allí la flagrante autocontradicción en la que incurre la fundamentación de la sentencia cuando refiere a "abusos sexuales consentidos".*"

*"Resulta inadmisibile sostener que una persona, por ser paraguaya, se ve impedida de comprender que no tiene derecho a violar a su esposa, toda vez que no existe una regla general que establezca aquella permisión ni en la República Argentina, ni en la "Villa 21", ni tampoco en la República del Paraguay; muy por el contrario, las convenciones sobre derechos humanos de las mujeres se encuentran vigentes en todos estos espacios."*

Esta sentencia es relevante porque demuestra los prejuicios que existen con relación a la violación dentro del matrimonio. El juez tiene la obligación de reconocer que la violencia sexual y el sometimiento de una persona por otra, es responsabilidad del estado, aunque suceda en el ámbito privado y entre cónyuges.

## **VI. Conclusiones**

La violencia contra las mujeres es una grave afectación a los derechos humanos. La responsabilidad de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres es del Estado. Las obligaciones concretas consisten en:

1) Legislar y armonizar las leyes del país con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

2) Establecer políticas públicas de prevención de la violencia contra las mujeres. Para esto se deben realizar diagnósticos, evaluaciones y desde luego contar con presupuestos etiquetados para llevar a cabo acciones de sensibilización y prevención de la violencia.

3) Juzgar con perspectiva de género, sancionar a quienes cometen actos de violencia en cualquier ámbito, emitir órdenes de protección para quienes lo requieran.

La violencia contra las mujeres nos afecta a todas y a todos. Una vida libre de violencia es posible y es urgente. De esta manera, nos sumamos a los motivos que llevaron a los países miembros de la OEA a ratificar la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres:

RECONOCIENDO que el respeto irrestricto a los derechos humanos ha sido consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reafirmado en otros instrumentos internacionales y regionales;

AFIRMANDO que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades;

PREOCUPADOS porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres;

RECORDANDO la Declaración sobre la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, adoptada por la Vigésimoquinta Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres, y afirmando que la violencia contra la mujer trasciende todos los sectores de la sociedad. Independientemente de su clase, raza o grupo étnico, ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión que afecta negativamente sus propias bases;

CONVENCIDOS de que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de vida, y

CONVENCIDOS de que la adopción de una convención para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos, constituye una positiva contribución para proteger los derechos de la mujer y eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarlas,

No más violencia contra las mujeres.



***La Violencia contra las Mujeres:  
Responsabilidad del Estado***

Presentación .....	1
Introducción .....	1
I. 25 de Noviembre .....	3
II. La violencia contra las mujeres en cifras .....	3
III. Reconocimiento de los Derechos Humanos de las Mujeres .....	4
IV. Belem dó Pará .....	5
V. Sentencias Internacionales .....	6
VI. Conclusiones .....	9